



**Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos**

Distr.
RESERVADA *

CCPR/C/80/D/1115/2002
30 de abril de 2004

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
80º período de sesiones
15 de marzo a 2 de abril de 2004

DECISIÓN

Comunicación N° 1115/2002

<i>Presentada por:</i>	Werner Petersen (representado por su abogado, el Sr. Georg Rixe)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado Parte:</i>	Alemania
<i>Fecha de la comunicación:</i>	31 de enero de 2002 (fecha de la carta inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 91 del reglamento, transmitida al Estado Parte el 2 de septiembre de 2002 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de adopción de la decisión:</i>	1º de abril de 2004

[Anexo]

* Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos.

Anexo

**DECISIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA DE
CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
-80º PERÍODO DE SESIONES-**

respecto de la

Comunicación N° 1115/2002*

Presentada por: Werner Petersen (representado por su abogado, el Sr. Georg Rixe)

Presunta víctima: El autor

Estado Parte: Alemania

Fecha de la comunicación: 31 de enero de 2002 (fecha de la carta inicial)

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 1º de abril de 2004,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre la admisibilidad

1. El autor de la comunicación es Werner Petersen, de nacionalidad alemana, que afirma ser víctima de una violación por parte de Alemania¹ de los párrafos 1 y 3 del artículo 2 y de los artículos 3, 14, 17 y 26 del Pacto. Está representado por su abogado.

* Participaron en el examen de la presente comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Nisuke Ando, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sra. Christine Chanet, Sr. Franco Depasquale, Sr. Maurice Glèlè Ahanhanzo, Sr. Walter Kälin, Sr. Ahmed Tawfik Khalil, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Martin Scheinin, Sr. Ivan Shearer, Sr. Hipólito Solari Yrigoyen, Sr. Roman Wieruszewski y Sr. Maxwell Yalden.

¹ El Pacto y el Protocolo Facultativo del Pacto entraron en vigor en Alemania el 17 de marzo de 1974 y el 25 de noviembre de 1993, respectivamente. Al ratificar el Protocolo Facultativo el Estado Parte formuló la reserva siguiente: "La República Federal de Alemania formula una reserva respecto del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 en el sentido de que la competencia del Comité no se aplicará a las comunicaciones a) que hayan sido examinadas ya en virtud de otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales, o b) mediante las cuales se denuncie una violación de derechos originada en acontecimientos anteriores a la entrada en vigor del Protocolo Facultativo para la República Federal de Alemania, o c) mediante las cuales se denuncie una violación del artículo 26 [de dicho Pacto], en la medida en que la violación denunciada se refiera a derechos distintos de los garantizados en virtud del Pacto".

Los hechos expuestos por el autor

2.1. El autor es padre de un hijo nacido fuera de matrimonio el 3 de mayo de 1985. Vivió con la madre del niño, Sra. B., desde mayo de 1980 hasta noviembre de 1985. Acordaron que el hijo llevara el apellido de la madre. Tras separarse de la madre, el autor continuó pagando la pensión alimentaria y mantuvo contactos regulares con su hijo hasta el otoño de 1993. En agosto de 1993 la madre contrajo matrimonio con el Sr. K. y adoptó el apellido de su marido junto con su propio apellido, es decir, B.-K.

2.2. En noviembre de 1993 el autor preguntó a la Oficina de la Juventud de Bremen si la madre había solicitado el cambio de apellido de su hijo. Por carta de 20 de diciembre de 1993 fue informado de que la madre había explorado esa posibilidad pero de que hasta el momento no se había formulado ninguna petición. En su carta, el funcionario competente de la Oficina de la Juventud informaba al autor de que, de formularse tal petición, accedería al cambio de apellido, toda vez que el padrastro convivía con la madre y con el hijo desde hacía más de un año y que el hijo lo aceptaba sin reservas. El 30 de diciembre de 1993 la madre y su marido declararon ante la Oficina del Registro de Bremen que daban su apellido familiar (K.) al hijo del autor. Presentaron también un documento expedido por la Oficina de la Juventud de Bremen el 29 de diciembre de 1993 en nombre del hijo (de 8 años de edad en ese momento), según el cual éste aceptaba el cambio de su apellido. La Oficina del Registro de Bremen informó en consecuencia a la Oficina del Registro de Helmstedt, tras lo cual el secretario de la Oficina de Helmstedt hizo constar en la partida de nacimiento del hijo el cambio de su apellido.

2.3. El 6 de abril de 1994 el autor presentó una demanda contra el ayuntamiento de Bremen ante el Tribunal Administrativo de Bremen, en la que denunciaba que la Oficina de la Juventud de Bremen no le había consultado sobre el previsto cambio de apellido de su hijo. El 19 de mayo de 1994 el Tribunal Administrativo de Bremen se declaró incompetente para conocer la demanda y remitió el caso al Tribunal de Distrito de Braunschweig.

2.4. El 21 de octubre de 1994 el Tribunal de Distrito de Braunschweig desestimó la demanda del autor de que en la partida de nacimiento de su hijo se rectificara el cambio de apellido. El Tribunal concluyó que la inscripción era correcta porque el apellido del hijo había sido cambiado de conformidad con el artículo 1618² del Código Civil. Consideró que dicho artículo no suponía una violación de la disposición de no discriminación de la Constitución de Alemania ni del artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo). En todo caso, el artículo 1618 del Código Civil no afectaba a la igualdad entre los hijos legítimos y los habidos fuera de matrimonio. Antes bien, al prever la

² Según el artículo 1617 del Código Civil vigente entonces en Alemania, el hijo nacido fuera de matrimonio recibía el apellido que la madre tuviera en el momento del nacimiento. El ulterior cambio de apellido de la madre como consecuencia de su matrimonio no afectaba al apellido del hijo. El artículo 1618 del mismo Código establecía que la madre de un hijo nacido fuera de matrimonio y su marido podían declarar, a efectos de registro, que el hijo cuyo apellido se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 1617 y que seguía soltero llevaría en el futuro el apellido familiar. Análogamente, el padre del hijo podría declarar, a efectos de registro, que el hijo llevaría su apellido. El hijo y la madre tenían que dar su acuerdo al cambio de apellido, en el caso de que el padre deseara dar su apellido al hijo.

posibilidad de que tuvieran el mismo apellido, el artículo 1618 garantizaba que la condición del hijo nacido fuera de matrimonio no fuera de conocimiento público. En cuanto a las cuestiones de procedimiento, no era posible cuestionar desde el punto de vista constitucional las actuaciones judiciales para el cambio de apellido en las que el padre natural no participaba. En particular, no se violaron los derechos del autor como padre natural puesto que su hijo nunca llevó el apellido de su padre. El cambio de apellido perseguía el interés superior del niño. El derecho del padre natural a ser oído en las actuaciones, como sostenía el autor, sin la posibilidad de bloquear el cambio de apellido no sería efectivo, puesto que en todo caso la madre y el padrastro tendrían la última palabra.

2.5. El 4 de enero de 1995 el Tribunal Regional de Braunschweig desestimó la apelación del autor, confirmando el razonamiento del Tribunal de Distrito y sosteniendo que no había ningún indicio de que las disposiciones jurídicas aplicadas en el presente caso fueran inconstitucionales. El cambio de apellido se hacía en interés del bienestar del niño, que prevalecía sobre los intereses del padre natural.

2.6. El 10 de marzo de 1995 el Tribunal Regional Superior de Braunschweig desestimó un nuevo recurso de apelación del autor. Sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Federal, reiteró que el artículo 1618 del Código Civil no se podía impugnar por razones constitucionales. El autor no podía derivar de sus derechos como padre natural ningún derecho a ser oído en las actuaciones judiciales sobre el cambio de apellido de su hijo, porque sus derechos entraban en conflicto con los de la madre y, en particular, los del hijo, cuya protección era el objetivo fundamental de la disposición. Los intereses del hijo quedaban salvaguardados con la participación de la Oficina de la Juventud en las actuaciones. Si la madre del hijo, su marido y el tutor accedieron al cambio de apellido del hijo, parecía lógico suponer que ese cambio se hizo en interés del bienestar del hijo.

2.7. En enero de 1994, como resultado de problemas de acceso a su hijo, el autor pidió al Tribunal de Distrito de Bremen que adoptara una decisión concediéndole un derecho de acceso directo a su hijo. En abril de 1994 el Tribunal de Distrito, por decisión cautelar, le concedió derechos de visita. La madre del hijo no respetó la decisión y prohibió las visitas a partir de octubre de 1994.

2.8. El 3 de enero de 1995 el autor denunció a la madre ante el Tribunal de Distrito de Bremen, solicitando el reembolso de los gastos de viaje en que había incurrido al tratar infructuosamente de visitar a su hijo el 16 de octubre y el 13 de noviembre de 1994.

2.9. El 5 de abril de 1995, tras una vista oral, el Tribunal de Distrito de Bremen desestimó la acción del autor. Consideró que no había base jurídica para solicitar el reembolso de los gastos ocasionados por la negativa de la madre a permitirle ver a su hijo. El Tribunal observó que, de conformidad con el artículo 1711 del Código Civil, la persona que tiene la tutela y la custodia de un hijo nacido fuera de matrimonio determina las modalidades de contacto con el padre y que éste sólo puede reclamar un contacto personal si ese contacto va en interés del niño. El Tribunal observó también que su decisión cautelar de abril de 1994 sobre las modalidades de visita se había formulado en términos de conceder al hijo el derecho de visitar al autor, y no de conceder al autor un derecho de acceso al hijo.

2.10. El 17 de agosto de 1995 la Corte Constitucional Federal desestimó las impugnaciones del autor por razones constitucionales de las decisiones adoptadas en ambas actuaciones (cambio de apellido de su hijo; desestimación de su demanda de indemnización). Concluyó que en ambos casos no se habían cumplido las condiciones de admisibilidad. En particular, la Corte consideró que la denuncia del autor referente al cambio de apellido de su hijo no planteaba ninguna cuestión de importancia fundamental. Remitiéndose a su decisión de 7 de marzo de 1995 en otra causa³, recordó que el padre de un hijo nacido fuera de matrimonio tenía derecho a la tutela y educación del hijo con arreglo a la Ley fundamental, aunque no viviera con la madre ni educara al hijo con la madre. Sin embargo, en el presente caso nada indicaba que los tribunales, al interpretar y aplicar el artículo 1618 del Código Civil, no hubieran tenido en cuenta los derechos parentales del autor. En cuanto a la decisión del Tribunal de Distrito de Bremen de 5 de abril de 1995, la Corte consideró que el autor no tenía base constitucional para pretender que su derecho parental de acceso a su hijo sirviera de fundamento a una acción de reclamación de daños.

2.11. El 8 de febrero de 1996 el autor formuló una petición al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que afirmaba que se habían violado sus derechos y los de su hijo reconocidos en los artículos 6, 8 y 14 del Convenio Europeo. El 6 de diciembre de 2001 el Tribunal Europeo declaró la petición inadmisibile⁴ por las razones siguientes: 1) la falta de legitimidad del autor para actuar en nombre de su hijo; 2) la incompatibilidad *ratione materiae* con las disposiciones del Convenio de su denuncia de que en las actuaciones relativas al cambio de apellido de su hijo había sido objeto de discriminación por su calidad de padre natural, lo cual violaba el artículo 14 del Convenio; y 3) por carecer manifiestamente de fundamento cuando el autor aducía: a) que el cambio de apellido de su hijo violaba su derecho al respeto de su vida familiar reconocido en el artículo 8 del Convenio; b) que la falta de una audiencia oral y la difusión pública de las decisiones adoptadas en las actuaciones ante el Tribunal Administrativo de Bremen y los Tribunales Regional y de Distrito de Braunschweig violaban el artículo 6 del Convenio; y c) que la desestimación de su demanda de indemnización no sólo constituía una violación de sus derechos de visita sino que suponía también una discriminación contra él si se comparaba su caso con el de los padres de hijos legítimos, lo que suponía una violación del artículo 8, leído conjuntamente con el artículo 14, del Convenio.

La denuncia

3.1. El autor denuncia la violación de los derechos que le reconocen los párrafos 1 y 3 del artículo 2 y los artículos 3, 14, 17 y 26 del Pacto, pues sus intereses como padre natural no se han tenido debidamente en cuenta, toda vez que no se ha requerido ni su consentimiento ni su participación en las actuaciones judiciales para cambiar el apellido de su hijo. Afirmar explícitamente que no presenta la comunicación en nombre de su hijo.

³ Decisiones de la Corte Constitucional (BVerfGE), Vol. 92, Nº 12, pág. 158.

⁴ Véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos (tercera sección), decisión sobre la admisibilidad de la petición Nº 31180/96 (*Werner Petersen c. Alemania*), 6 de diciembre de 2001.

3.2. El autor sostiene que, a diferencia del padre de un hijo legítimo, no contaba con respaldo oficial para justificar el cambio de apellido del hijo por una razón importante relativa al bienestar del niño. Se siente discriminado en comparación con la madre o el padre de un hijo legítimo quienes, de conformidad con la Ley sobre el cambio de apellido, deben ser oídos en las actuaciones. Además, a diferencia del padre de un hijo legítimo, no tenía acceso efectivo a los tribunales para impugnar la decisión del tutor, la madre y su marido sobre el cambio de apellido por falta de razones importantes, incompatibilidad con el interés del niño o imposibilidad de ser oído en las actuaciones sobre el cambio de apellido.

3.3. El autor sostiene que el cambio de apellido de su hijo no persigue ningún objetivo legítimo porque el bienestar del niño requiere por lo general la continuidad de su apellido como medio de identificación personal. Ocultar un nacimiento ilegítimo mediante el cambio de apellido no es un objetivo legítimo. Además, la representación por el tutor no protege suficientemente los intereses del niño, pues la Oficina de la Juventud por lo general sólo da audiencia a la madre y a su marido y no al propio hijo.

3.4. El autor sostiene que la decisión del Tribunal de Distrito de Bremen de 5 de abril de 1995 viola sus derechos garantizados en los artículos 2, 3, 17 y 26 del Pacto, pues no le garantiza el derecho de acceso a su hijo. Añade que el padre de un hijo legítimo tiene derecho a una indemnización si la madre le niega el derecho de acceso.

3.5. El autor sostiene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decisión sobre inadmisibilidad de 6 de diciembre de 2001, no "examinó" sus denuncias en el sentido de la reserva del Estado Parte al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. Si existe una diferencia sustancial entre las disposiciones aplicables del Pacto y del Convenio Europeo y si el asunto ha sido declarado inadmisibile *ratione materiae* por el Tribunal Europeo, el asunto no ha sido "examinado" en el sentido de la reserva de Alemania, de conformidad con la jurisprudencia del Comité en *Rogl c. Alemania*⁵ y en *Casanovas c. Francia*⁶.

3.6. En cuanto a sus pretensiones al amparo del artículo 26 del Pacto, el autor afirma que el Tribunal Europeo ha sostenido que el cambio de apellido de su hijo y la negativa a reembolsarle los gastos de los viajes infructuosos no afectaba directamente a su derecho a la vida familiar (artículo 8 del Convenio), por lo que no se justificaba la aplicación del artículo 14, que sólo se podría aplicar en relación con los derechos y libertades sustantivos del Convenio. A diferencia del artículo 14 del Convenio Europeo, el artículo 26 es una disposición autónoma que se podría invocar independientemente de los demás derechos garantizados en el Pacto. A la luz de la diferencia sustancial entre ambas disposiciones, la reserva de Alemania no impedía al Comité examinar las denuncias del autor basadas en el artículo 26 del Pacto.

3.7. En cuanto a sus denuncias basadas en el artículo 17 del Pacto, el autor sostiene que la conclusión del Tribunal Europeo de que su derecho al respeto de la vida familiar no se vio afectado por el cambio de apellido de su hijo o por la desestimación de su reclamación de indemnización demuestra que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que esas denuncias se

⁵ Comunicación N° 808/1998.

⁶ Comunicación N° 441/1990.

salen del ámbito del artículo 8 del Convenio, por lo que no considera que entren en el ámbito de la reserva de Alemania. Además, el Tribunal no examinó su denuncia al amparo del artículo 14 del Convenio de que, en comparación con los padres de hijos legítimos, él no tenía acceso a los tribunales para impugnar el cambio de apellido por no redundar en el interés del niño o por no haber sido oído en las actuaciones pertinentes.

3.8. En relación con la reserva del Estado Parte *ratione temporis*, el autor afirma que el cambio de apellido de su hijo se originó el 30 de diciembre de 1993 cuando la madre y su marido registraron sus declaraciones en la Oficina de Registro de Bremen, la cual informó a continuación a la Oficina del Registro de Helmstedt, cuyo secretario incluyó el cambio de nombre en la partida de nacimiento del niño. La reclamación de una indemnización ante el Tribunal de Distrito de Bremen se refería a los gastos de los viajes infructuosos de 16 de octubre y 13 de noviembre de 1994, ya que la madre no le permitió ver a su hijo. Estos acontecimientos se produjeron después de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo para el Estado Parte el 25 de noviembre de 1993.

3.9. El autor sostiene que la reserva de Alemania al artículo 26 del Pacto es incompatible con el objeto y fin del Protocolo Facultativo, por no decir con el propio Pacto, toda vez que trata de limitar las obligaciones que el artículo 26 impone al Estado Parte de una manera incompatible con la interpretación que hace el Comité de esta disposición como principio independiente de igualdad⁷. Haciendo referencia a la Observación general N° 24⁸ del Comité, su jurisprudencia en *Kennedy c. Trinidad y Tabago*⁹ y el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sostiene que no es posible formular una reserva a una obligación sustantiva dimanante del Pacto a través del Protocolo Facultativo. Recuerda que en sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Alemania el Comité lamentó que el Estado Parte hubiera formulado esta reserva.

3.10. El autor sostiene que el Comité es competente para determinar si una reserva es compatible con el objeto y fin del Pacto y que el efecto de toda conclusión de que la reserva de Alemania es incompatible con el objeto y fin del Protocolo Facultativo es que esa reserva se podrá considerar independientemente, en el sentido de que el Pacto será aplicable para el Estado Parte que formule la reserva sin que ésta se tenga en cuenta¹⁰. Según él, el Estado Parte no tenía

⁷ El autor se remite a la comunicación N° 182/1984, *Zwaan-de Vries c. los Países Bajos*.

⁸ CCPR, 52° período de sesiones (1994), Observación general N° 24: Cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos o de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto, párr. 13.

⁹ Comunicación N° 845/1998, párr. 6.

¹⁰ El autor se remite a la Observación general N° 24, párr. 18, y a la decisión del Comité sobre la admisibilidad de la comunicación N° 845/1998, *Kennedy c. Trinidad y Tabago*.

un interés legítimo en mantener su reserva después de haber firmado¹¹ el Protocolo N° 12 del Convenio Europeo, que contiene una prohibición general de la discriminación. El autor concluye que la reserva es nula y no impide al Comité examinar sus denuncias al amparo del artículo 26.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad

4.1. El 1° de noviembre de 2002 el Estado Parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la comunicación sosteniendo que, sobre la base de la reserva de Alemania, la comunicación era inadmisibile *ratione materiae* y por haber sido examinado el mismo asunto con anterioridad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

4.2. El Estado Parte razona que una invocación aislada de los artículos 3 y 26 del Pacto es incompatible con los términos del artículo 3 y con la reserva formulada por Alemania al artículo 26, dado el carácter accesorio de ambas disposiciones. Dado que el autor denuncia la violación de esas disposiciones solamente, su comunicación debe considerarse incompatible *ratione materiae* con las disposiciones del Pacto. Al invocar esas disposiciones separadamente de los artículos 14 y 17 del Pacto, el autor trata de eludir el apartado a) de la reserva de Alemania, ya que ambas denuncias son idénticas y se basan en los mismos argumentos ya considerados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La mera formulación de una queja como denuncia aislada de discriminación, sobre el mismo asunto y basada en los mismos argumentos que la petición dirigida anteriormente al Tribunal Europeo no debería impedir la aplicación de la reserva de Alemania, cuyo objeto era evitar la duplicación de procedimientos internacionales de control, la adopción de decisiones contradictorias con arreglo a esos procedimientos y la búsqueda de un "foro amigable" por los demandantes.

4.3. El Estado Parte añade que el Tribunal Europeo ha "examinado" el mismo asunto puesto que su decisión de que la denuncia del autor era inadmisibile *ratione materiae* o manifiestamente infundada implicaba en ambos casos un examen sumario del fondo de su petición. El dictamen del Comité en *Casanovas c. Francia* debe distinguirse del presente caso, toda vez que el ámbito de protección del artículo 6 del Convenio Europeo difiere sustancialmente del artículo 14 del Pacto, en cuanto a la cuestión decidida en ese caso. El hecho de que el Tribunal Europeo declarara inadmisibile la petición *ratione materiae* no resultaba por lo tanto decisivo para la conclusión del Comité de que el mismo asunto no había sido "examinado" por el Tribunal. Por el contrario, en el caso *Casanovas* no se había cumplido la exigencia adicional de un grado de protección comparable de los derechos en cuestión. Sin embargo, en el presente caso el autor no ha demostrado la existencia de una diferencia sustancial esencial entre los derechos derivados del Pacto invocados por él y sus equivalentes en el Convenio Europeo.

4.4. En cuanto a las denuncias específicas del autor, el Estado Parte sostiene que el Tribunal Europeo examinó si el cambio de apellido de su hijo afectaba a su derecho al respeto de la vida familiar reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo; examinó también los requisitos sustantivos del artículo 14 del Convenio y llegó a una conclusión negativa en ambos casos.

¹¹ Alemania firmó el Protocolo N° 12 del Convenio Europeo el 4 de noviembre de 2000, pero hasta la fecha no lo ha ratificado. Véase Oficina de Tratados del Consejo de Europa en: <http://conventions.coe.int> (consultada el 22 de diciembre de 2003).

Como resultado de este examen, el Comité dejó de ser competente para examinar las pretensiones idénticas del autor al amparo del artículo 17, leído conjuntamente con el artículo 26 del Pacto, por no existir una diferencia sustancial con los artículos 8 y 14 del Convenio Europeo.

4.5. En cuanto a la denuncia del autor fundada en el artículo 14, leído conjuntamente con el artículo 26, de que las actuaciones relacionadas con el cambio de apellido de su hijo no fueron imparciales y de que, como padre de un hijo nacido fuera de matrimonio, no tuvo la oportunidad de impugnar el cambio de apellido, el Estado Parte sostiene que el Tribunal Europeo declaró esas denuncias inadmisibles por ser manifiestamente infundadas, después de examinar exhaustivamente el fondo de las denuncias en el marco de los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo. Por consiguiente, la competencia del Comité para examinar el mismo asunto quedó descartada por la reserva de Alemania.

4.6. Por último, en relación con la denuncia del autor al amparo del artículo 17, leído conjuntamente con el artículo 26 del Pacto, de que la negativa a indemnizarle por los gastos en que había incurrido con motivo de sus viajes infructuosos constituía una discriminación en su contra en comparación con los padres de hijos legítimos y no garantizaba su derecho de acceso a su hijo, el Estado Parte sostiene que el Tribunal Europeo consideró que la denuncia tenía un carácter principalmente económico, que se salía del ámbito de protección del artículo 8 del Convenio Europeo.

Comentarios del autor

5.1. El 20 de febrero de 2003 el autor reafirmó que la comunicación era admisible por las razones expuestas en su comunicación inicial. Subraya que sus denuncias independientes de discriminación no han sido ni podían haber sido examinadas por el Tribunal Europeo, de acuerdo con su jurisprudencia establecida¹². Por consiguiente, la reserva del Estado Parte al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo no impedía al Comité examinar esas denuncias.

5.2. Según el autor, el Estado Parte no rebatió su argumento de que la reserva de Alemania al artículo 26 del Pacto es incompatible con el objeto y el fin del Pacto y, por tanto, se puede considerar por separado. Sostiene que, en su quinto informe periódico¹³ al Comité de Derechos Humanos, el Estado Parte indica que examinará esta sección de la reserva una vez terminada la ratificación del Protocolo Facultativo N° 12 del Convenio Europeo, que contiene una prohibición general de la discriminación. A juicio del autor, ello apoya su hipótesis de que el Estado Parte no tiene interés legítimo en mantener la reserva.

¹² El autor se remite a la comunicación N° 965/2000, *Karakurt c. Austria*, párr. 7.4.

¹³ Quinto informe periódico, Alemania, documento CCPR/C/DEU/2002/5 de las Naciones Unidas, 4 de diciembre de 2002, párr. 372.

Deliberaciones del Comité

6.1. Antes de examinar cualquier denuncia formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 87 de su reglamento, debe decidir si la comunicación es admisible con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2. El Comité advierte que el Estado Parte ha invocado la reserva que formuló al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo en el sentido de que la competencia del Comité no se aplicará en las comunicaciones que hayan sido examinadas ya en virtud de otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. El Comité tiene el convencimiento de que el examen por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constituye un examen en virtud de otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales en el sentido del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.3. El Comité observa que el apartado a) de la reserva del Estado Parte al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 debe leerse a la luz de los términos de esa disposición. Por consiguiente, una comunicación habrá sido examinada ya por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el examen de dicho Tribunal se refiere al "mismo asunto". El Comité recuerda su jurisprudencia según la cual el "mismo asunto" en el sentido del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 debe entenderse que se refiere al mismo autor, los mismos hechos y los mismos derechos sustantivos¹⁴. Observa que la petición N° 31180/96 fue presentada al Tribunal Europeo por el mismo autor, se basaba en los mismos hechos y se refería, al menos en parte, a los mismos derechos sustantivos que los evocados en la presente comunicación, toda vez que los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo son similares en su alcance y en su fondo a los artículos 14 y 17 del Pacto.

6.4. Tras haber concluido que la reserva formulada por el Estado Parte en relación con el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo es aplicable, el Comité debe considerar el argumento del autor de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no "examinó" el mismo asunto, en el sentido de la reserva del Estado Parte. El Comité recuerda su jurisprudencia de que cuando los órganos de Estrasburgo basan una declaración de inadmisibilidad no sólo en cuestiones de procedimiento¹⁵, sino en razones que suponen un cierto examen del fondo del asunto, el mismo asunto ha sido "examinado" en el sentido de las reservas respectivas al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo¹⁶.

6.5. En cuanto a la denuncia del autor de que el cambio de apellido de su hijo y la desestimación de su petición de indemnización violan su derecho al respeto de la vida familiar reconocido en el artículo 17, junto con sus derechos procesales derivados del artículo 14 del Pacto, el Comité observa que el Tribunal Europeo declaró la denuncia análoga inadmisibile por ser manifiestamente infundada, de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo 35 del

¹⁴ Véase, por ejemplo, la comunicación N° 998/2001, *Althammer c. Austria*, párr. 8.4.

¹⁵ Véase, por ejemplo, la comunicación N° 716/1996, *Pauger c. Austria*, párr. 6.4.

¹⁶ Véase, por ejemplo, la comunicación N° 121/1982, *A. M. c. Dinamarca*, párr. 6, y la comunicación N° 744/1997, *Linderholm c. Croacia*, párr. 4.2.

Convenio Europeo. El Tribunal basó su conclusión en el hecho de que el hijo no había llevado nunca el apellido del autor, que por consiguiente nunca había constituido un signo exterior de vinculación entre el autor y su hijo. En cuanto a la petición de indemnización, el Tribunal concluyó que el asunto era principalmente de carácter económico, lo cual no tenía nada que ver con la adopción de una decisión sobre el acceso o la protección de derecho de acceso a su hijo. Por consiguiente, la desestimación de la petición de indemnización no afectaba al derecho del autor al respeto de su vida familiar. El Comité concluye que al examinar las denuncias del autor al amparo del artículo 8 del Convenio Europeo, el Tribunal Europeo no se limitó a examinar criterios puramente procesales de admisibilidad. Lo mismo cabe decir de sus denuncias al amparo del artículo 6 del Convenio Europeo, que se referían a la necesidad de una audiencia pública y de la publicación de las sentencias de los Tribunales Regional y de Distrito de Braunschweig, y por tanto afectaban a aspectos del artículo 6 del Convenio Europeo, que es similar en su contenido y en su ámbito al artículo 14 del Pacto. Por consiguiente, esta parte de la comunicación ya ha sido "examinada" en el sentido de la reserva del Estado Parte.

6.6. En cuanto a la denuncia del autor, al amparo del artículo 26 del Pacto, de que fue objeto de discriminación, en comparación con la madre del hijo o los padres de hijos legítimos, el Comité observa que el Tribunal Europeo declaró inadmisibles *ratione materiae* otras denuncias similares presentadas por el autor, por no ser aplicable el artículo 14 del Convenio Europeo toda vez que su derecho al respeto de la vida familiar no se veía afectado por las decisiones referentes al cambio de apellido ni por las actuaciones derivadas de la petición de indemnización. El Comité recuerda su jurisprudencia¹⁷ en el sentido de que si los derechos invocados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos difieren en el fondo de los derechos consagrados en el Pacto, un asunto que haya sido declarado inadmisibles *ratione materiae* no ha sido "examinado" en el sentido de la reserva formulada al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 de modo que el Comité no pueda examinarlo.

6.7. El Comité recuerda que el derecho independiente a la igualdad y a la no discriminación consagrado en el artículo 26 del Pacto ofrece mayor protección que el derecho accesorio a la no discriminación recogido en el artículo 14 del Convenio Europeo¹⁸. Señala que a falta de una denuncia independiente formulada al amparo del Convenio o de sus Protocolos pertinentes, el Tribunal Europeo no podía haber examinado si se habían violado los derechos accesorios del autor reconocidos por el artículo 14 del Convenio. Por consiguiente, las pretensiones del autor en relación con el artículo 26 del Pacto no han sido examinadas por el Tribunal Europeo. De ello se infiere que la reserva formulada por el Estado Parte al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo no impide al Comité examinar esta parte de la comunicación.

6.8. El Comité recuerda que no toda distinción hecha en las leyes de un Estado Parte equivale a una discriminación en el sentido del artículo 26, sino sólo aquellas distinciones que no se basen en criterios objetivos y razonables. El autor no ha fundamentado, a efectos de la admisibilidad, su alegación de que las razones de introducir el artículo 1618 en el Código Civil de Alemania (párr. 2.4 *supra*) no fueron objetivas ni razonables. Tampoco ha fundamentado el autor su afirmación de que la denegación de indemnización por los gastos de los viajes infructuosos

¹⁷ Véase, por ejemplo, la comunicación N° 441/1990, *Casanovas c. Francia*, párr. 5.1.

¹⁸ Véase la comunicación N° 998/2001, *Althammer c. Austria*, párr. 8.4.

constituyó una discriminación en el sentido del artículo 26 del Pacto. En consecuencia, esta parte de la comunicación es inadmisibile con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6.9. En estas circunstancias, no es necesario que el Comité estudie la admisibilidad y aplicabilidad de la reserva del Estado Parte al Protocolo Facultativo en relación con el artículo 26.

6.10. En cuanto a la denuncia del autor de que se le negó el acceso a los tribunales alemanes, en violación del artículo 14 del Pacto porque, a diferencia de los padres de hijos legítimos, no pudo impugnar la decisión de cambiar el apellido de su hijo, ni pedir una indemnización por la violación por parte de la madre de su derecho de acceso a su hijo, el Comité observa que el autor tuvo acceso a los tribunales alemanes en relación con ambos asuntos, pero que esos tribunales desestimaron sus pretensiones. Considera que el autor no ha fundamentado, suficientemente a efectos de la admisibilidad, la reclamación de que sus denuncias plantean cuestiones relacionadas con el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto que podrían ser planteadas independientemente del artículo 26 y que no se refieren a asuntos ya "examinados", en el sentido de la reserva del Estado Parte, por el Tribunal Europeo¹⁹.

7. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos decide:

a) Que la comunicación es inadmisibile con arreglo al artículo 2 y al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo;

b) Que se comunice la presente decisión al Estado Parte y al autor.

[Adoptado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

¹⁹ Véase el párrafo 6.5 *supra*.